

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio No. _____

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y restablecimiento del derecho
EXPEDIENTE:	76001-33-33-018-2013-00295-01
DEMANDANTE:	Marotcy Montoya Rodríguez abogadohenryalvarez@gmail.com jehgmagister@gmail.com
DEMANDADO:	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
TEMA:	Excepción cosa juzgada.

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN

I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Corresponde a esta Sala Tercera de Decisión resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el auto interlocutorio No. 369 proferido en abril 28 de 2015 por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada en la audiencia inicial.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

Por conducto de apoderado judicial la señora Marotcy Montoya Rodríguez promovió a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP en adelante), demanda con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la resoluciones Nos.: **23469** del 22 de agosto de 2002 y **10779** de 16 de junio de 2003; **18347** de 10 de septiembre de 2004; **UGM008509** de 15 de septiembre de 2011, **RDP-041911** de 10 de septiembre de 2013 y **RDP-046803** de 8 de octubre de 2013 expedidas por la entidad demandada .

En consecuencia pide la demandante, reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia *post mortem* en un 100% con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Antonio José Echeverría Gutiérrez, en el equivalente al 75% del promedio de lo devengado por el causante por concepto de factores salariales en el último año de servicios inmediatamente anterior al cumplimiento del *status* pensional, entre el 29 de mayo de 1987 y el 29 de mayo de 1988, efectiva a partir de mayo 29 de 1988, por prescripción trienal, dicha prestación se reliquidará a partir 15 de diciembre de 1992, día siguiente al fallecimiento del causante.



III. PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, en la audiencia inicial profirió el auto interlocutorio No. 369, que declaró probada de oficio la excepción cosa juzgada, bajo los siguientes presupuestos:

“Con la demanda se arrimó al proceso la sentencia No. 180 del 3 de octubre de 2006 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en el cual se resolvió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Marotcy Montoya Rodríguez contra la Caja Nacional de Previsión Social hoy sustituida por la UGPP en esta sentencia y de acuerdo con las pretensiones y hechos que se fundamentan, los actos acusados fueron declarados nulos y el tema central que se debatió en ese proceso fue definir entre otros extremos del litigio la fecha de causación de jubilación de pensión gracia, esta sentencia tuvo como tal el 17 de enero de 1984, el recurso de apelación que interpuso la entidad demandada fue resuelto por el Consejo de Estado mediante fallo el 3 de abril de 2008 a través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, incluido la fecha de causación es decir reconoció esta prestación a partir del 17 de enero de 1984, estas copias obran en copia simple con constancia de ejecutoria.

*En el proceso actual el punto que nos convoca la controversia es la fecha de causación en la demanda a parte de acusar de nulidad varios de los actos administrativos que declararon nulo el Tribunal y el Consejo de Estado, también acusa tres actos administrativos adicionales estos son la Resolución **UGM008509** de 15 de septiembre de 2011, (...) **RDP-041911** de 10 de septiembre de 2013 (...) y **RDP-046803** de 8 de octubre de 2013 (...). Tanto en sede administrativa como en la demanda judicial se pretende que la fecha de causación que la fecha de causación de la pensión gracia no es el año 1984 sino el año 1988 y para ello se funda en que hay un error en la certificación laboral que expidió el empleador en el sentido que el tiempo trabajado 1964 y 1972 fue certificado por un lapso de ocho años (...).pero con la particularidad que ese desempeño fue por un tiempo parcial de acuerdo pues con los argumentos de la parte demandante, cuando se trabaja en esas condiciones no se puede contabilizar los ocho años, sino 4 años, de manera que los cuatro años faltantes digamos se correrían de 1984 a 1988 como fecha de causación de esa pensión y como tal cambiaría el ingreso base de liquidación dado que se tomarían los factores salariales percibidos en el último año 1987 y 1998, planteamiento que se hace en la demanda.*

De manera que vamos a ver si se reúnen los requisitos 303 y 189 del CPACA, La primera exigencia es que debe haber identidad de partes, (...) en ese punto el juzgado advierte que hay identidad jurídica de las partes en los dos procesos.

La segunda identidad de causa, (...) en el primer proceso se pretendía el reconocimiento de la pensión gracia y uno de los extremos que debían de definirse el cumplimiento de edad y tiempo de servicios (...) en la sentencia de primera instancia y de segunda que los 20 años los cumplió el 17 de enero de 1984, se acreditó los 20 años de servicio y los 50 años de edad del causante, (...) para efectos de determinar cuál era IBL para determinar la mesada. (...) en el segundo proceso, ese es el punto nodal de la discusión a diferencia de lo que dijo el tribunal, y confirmo el Consejo de Estado, lo que se pretende en ese segundo proceso es que se declare la nulidad de los actos administrativos del 2011 a 2013 y a título de restablecimiento del derecho se disponga que la pensión de jubilación gracia se causó en 1988 es decir 4 años después, por las razones ya explicadas. El Juzgado considera que en este proceso se demanda la nulidad de tres actos administrativos distintos que no se podían demandar en el primer proceso simplemente porque no existían, lo cierto que es que los tres actos administrativos que



expide la administración se deben a la pretensión que finalmente se plantean en el segundo proceso, el acto administrativo de 2011 se expide en acatamiento del fallo del tribunal y del Consejo de Estado, el segundo acto administrativo es como consecuencia de la solicitud de modificación de esa resolución de 2011, (se pedía que se modificará la fecha o el año que se adquirió el estatus de pensionado no 1984 sino 1988 como fue negado esa solicitud se solicitó la revocatoria directa de la resolución de 2011 que cumplía el fallo de la jurisdicción contenciosa y también se esgrimía lo mismo (...))también hay identidad de objeto, es claro que la pretensión fundamental es modificar la fecha en que se causó para alterar el ingreso base de liquidación aspecto que también coincide con el primer proceso que fue dilucidado en su momento. El Juzgado encuentra estructurado los elementos esenciales de la cosa juzgada en la medida que hay identidad de partes, identidad de objeto, identidad de causa están acreditados mediante sentencia, (...) por estas razones el juzgado declara probada de oficio la excepción cosa de juzgada, y en consecuencia da por terminado el proceso. (...) “

IV. EL RECURSO Y LA OPOSICIÓN.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, argumentando que:

“...(...) considero de que el hecho que haya habido una equivocación, de que no he haya dirimido tanto en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ni tampoco por el Consejo de Estado haya sido advertido esta situación en la cual los elementos estructurales para que se configurara el derecho a la pensión gracia que se le reconoce a los docentes que son un tiempo de servicios de 20 años y una edad de 50 años al cometer el error tanto CAJANAL en ese entonces y al no haber sido advertida tampoco por el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, la parte demandante considero pues que, a través de este nuevo vía contenciosa administrativa donde se solicita la nulidad de tres actos administrativos diferentes a los ya esbozados, en la primera demanda son suficientes para que el juzgado conociera y proferiera una sentencia sobre los hechos y pretensiones y fundamentos de hecho y los fundamentos jurídicos que se presentaron en la demanda inicial..”

Por lo expuesto, pide se revoque la providencia y sea admitido el medio de control. De dicha intervención le fue corrido traslado a la parte demandada UGPP.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad a lo establecido en el artículo 153 y el inciso 4 del numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente en sala de decisión para conocer del recurso interpuesto dentro del proceso de referencia, por lo que procede a resolver de fondo al respecto.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

La controversia jurídica planteada se resuelve respondiendo a la siguiente pregunta:



- ***¿Hay lugar a rechazar la demanda por haber operado la cosa juzgada del medio de control, tal y como lo determinó la providencia recurrida?***

5.3. TESIS DE LA SALA.

La Sala confirmará la providencia impugnada, por las razones que pasarán a exponerse.

5.4. MARCO NORMATIVO.

5.4.1. La cosa juzgada.

El H. Consejo de Estado con respecto a la cosa juzgada, ha manifestado¹:

“...6. De la cosa juzgada. Reiteración jurisprudencial.

Esta Sala ha expresado² que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable.

Que el elemento formal de la cosa juzgada tiene que ver con la imposibilidad de que el juez pueda volver a pronunciarse dentro del mismo proceso sobre un asunto que se decidió en una providencia ejecutoriada o, que otro juez, en un proceso diferente resuelva sobre una materia debatida con identidad de pretensiones y fundamentos jurídicos.

Así mismo se ha sostenido que el elemento material de la cosa juzgada tiene relación con la intangibilidad de la sentencia, en el entendido que se tiene por cierto que el juez de conocimiento se ocupó de la relación objeto de la contienda y que la decisión la adoptó respetando las formas propias del juicio.

Sobre el particular, esta Corporación manifestó:

“A la cosa juzgada o “res judicata” se le ha asimilado al principio del “non bis in idem”³ y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada por los artículos 332 del C. de P.C. y 175 del C.C.A., en los cuales se establecen los elementos formales y materiales para su configuración.

*El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro en el que se debata la misma *causa petendi* e idénticos fundamentos jurídicos, lo cual tiene como propósito garantizar la estabilidad y la seguridad del orden jurídico.*

Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que ésta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.”

¹ C. de E. Sección Quinta. CP: Dra. Susana Buitrago Valencia. Febrero 26 de 2015 Radicación: 17001-23-33-000-2014-00219-01(ACU) Actor: Armando Ramírez Olarte Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social.

² Ver sentencia del 1º de febrero de 2010, Exp. 2009-00025-02, CP: Dra. Susana Buitrago Valencia.

³ C. de Estado. Sentencia del 27 de noviembre de 2008. MP. Luis Rafael Vergara Quintero. Exp. 2000-00803.



De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada, son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.”

5.5. CASO CONCRETO.

El apoderado judicial de la parte actora interpuso en la audiencia inicial, recurso de apelación contra el auto No. 369 que resolvió declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, providencia proferida en la misma audiencia.

Por tanto, corresponde a la Sala determinar si el asunto es susceptible de control jurisdiccional en ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del CPACA, y determinar si hay lugar a rechazar la demanda por haber operado la cosa juzgada del medio de control, tal y como lo determinó el juez de primer grado a través de la providencia recurrida.

De conformidad con el artículo 328⁴ del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306⁵ del CPACA, esta Sala procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Para resolver la alzada es pertinentes, referirnos a los hechos y pruebas de la demanda, en ellas se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso ordinario donde obra como demandante la señora Marotcy Montoya Rodríguez Vs. CAJANAL EICE (hoy sucedida por la UGPP), con radicación 2004-3675 se profirió sentencia de fecha, tres (3) de octubre de 2006, en la cual ordenó⁶:

*“(…)1. **DECLÁRASE** la Nulidad parcial de las **Resoluciones No. 23469 de agosto 22 de 2002** mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación al señor JOSE ANTONIO ECHEVERRIA en cuantía de \$81.510.00 efectiva a partir del 17 de enero de 1984, pero con efectos fiscales a partir del 04 de marzo de 2000 por prescripción trienal y se le sustituyo en forma vitalicia la mencionada pensión a la señora MAROTCY MONTOYA RODRIGUEZ en calidad de cónyuge sobreviviente, en cuantía equivalente al 100% del total y efectiva a partir de la misma fecha y la **Resolución No. 10779** del 16 de junio de 2003 mediante la cual se revoca parcialmente la **Resolución No. 23469** de agosto 22 de 2002 en sus artículos primero y segundo en lo concerniente a los efectos fiscales de la Pensión Post Mortem de Jubilación Gracia reconocida y sustituida a la señora MAROTCY MONTOYA RODRÍGUEZ.*

⁴ **Artículo 328. Competencia del superior.** El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

⁵ **Artículo 306. Aspectos no regulados.** En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁶ Folios 51-69.



2. DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo ficto surgido del silencio administrativo, presuntamente negativo, mediante el cual la Subdirección General de la Caja Nacional de Previsión, negó, la solicitud presentada a esa entidad sobre reliquidación de la Pensión Vitalicia de Jubilación que fue reconocida a favor del señor JOSE ANTONIO ECHEVERRIA GUTIERREZ y sustituida a la señora MAROTCY MONTOYA RODRÍGUEZ en calidad de cónyuge sobreviviente en virtud de la Ley 116 de 1928 en cuantía de \$81.510.00 y no en la cuantía que resulte de aplicar todos los factores salariales devengados en el año anterior a que ésta adquirió el status de pensionada y los cuales se relacionan en el siguiente punto.

3. DECLARAR que el monto de la pensión gracia reconocida a favor del señor JOSE ANTONIO ECHEVERRIA GUTIERREZ y sustituida a la señora MAROTCY MONTOYA RODRÍGUEZ en calidad de cónyuge sobreviviente, es a partir del 17 de enero de 1984 pero con efectos fiscales a partir del 26 de noviembre de 2000, por prescripción trienal, en la cuantía que resulte de liquidar la pensión de jubilación, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por el señor JOSE ANTONIO ECHEVERRIA GUTIERREZ en el año anterior al que reunió los requisitos para recibir su pensión gracia, factores que son: Sueldo (...).” (folios 66-97).

La anterior decisión fue objeto del recurso de apelación por la entidad CAJANAL que fue resuelto a través de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado con fecha 3 de abril de 2008 en la cual resolvió:

“Confirmase la sentencia de 3 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la demanda incoada por MAROTCY MONTOYA RODRIGUEZ contra la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL.” (folios 72-83).

Al respecto, la Sala entiende que la cosa juzgada establecida en el artículo 303 del Código General del Proceso tiene como finalidad evitar decisiones contradictorias sobre un mismo problema jurídico presentado en la demanda y por ello ha expresado que se debe analizar si existe identidad de partes, identidad en la causa *petendi*, e identidad de objeto, razón por la cual la Sala estudiará cada uno de estos aspectos en el caso concreto.

1. Identidad de partes.

En el presente caso se tiene que la primera demanda con radicación 2004-3675 fue presentada por la señora Marotcy Montoya Rodríguez Vs. CAJANAL EICE (hoy sucedida por la UGPP) y el actual proceso con radicación 2013-00295-00 son las mismas partes, encontrándose satisfecho dicho requisito.

2. Identidad en la *causa petendi* o hechos de la demanda y causa o pretensiones.

Radicación 2004-3675	Radicación 2013-00295
Pidió la nulidad de las resoluciones Nos.: 23469 de 22 de agosto de 2002. Resolución No. 10779 de 16 de junio de 2003. Se demandó los actos que deciden el reconocimiento post mortem una pensión de	Resoluciones Nos.: 23469 de 22 de agosto de 2002 y 10779 de 16 de junio de 2003; 18347 de 10 de septiembre de 2004; UGM008509 de 15 de septiembre de 2011; RDP-041911 de 10 de septiembre de 2013 y



jubilación gracia a favor del señor José Antonio Echeverría Gutiérrez en cuantía de \$81.510 efectiva a partir del <u>17 de enero de 1984</u> pero con efectos fiscales a partir del <u>4 de marzo de 2000</u> por prescripción trienal y la sustitución de la misma en forma vitalicia a favor de la actora en un monto equivalente al 100% de \$81.510, efectiva a partir del 17 de enero de 1984 pero con efectos fiscales a partir del 4 de marzo de 1999 por prescripción trienal.	RDP-046803 de 8 de octubre de 2013 expedidas por la UGPP. Pide que reconozca, liquide y le pague la pensión gracia <i>post mortem</i> al docente fallecido Antonio José Echeverría Gutiérrez, plenamente identificado y sustituir en un 100% la prestación mencionada a favor de Marotcy Montoya Rodríguez, identificada, equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios inmediatamente anterior al cumplimiento del status pensional comprendido <u>entre el 29 de mayo de 1987 y el 29 de mayo de 1988</u> , efectiva a partir del 29 de mayo de 1988 .
--	--

Hasta aquí, evidencia la Sala que existe identidad de objeto y causa frente a las Resoluciones Nos. **23469** de agosto 22 de 2002 y **10779** de 16 de junio de 2003, pues se discuten en ambos procesos la legalidad y en los términos de las sentencias de primera y segunda instancia de asunto con radicación 2004-3675 ya fueron objeto de discusión por el juez ordinario, de manera que se advierten los mismos fundamentos fácticos y jurídicos en tanto que en la demanda presentada con radicación 2013-00295-00, al tener como objeto de litigio la fecha en el que se adquiere el *status* de pensionado del causante, por tanto, se configura la cosa juzgada, razones suficientes para rechazar esas pretensiones, decisión que es objeto de esta alzada.

Advierte la Sala que al pedirse la nulidad de la **Resolución UGM008509** de 15 de septiembre de 2011, **Resolución No. RDP-041911** de 10 de septiembre de 2013 y la **Resolución No. RDP-046803** de 8 de octubre de 2013 se observa claramente que estamos frente actos en los cuales se consideró el cumplimiento a una decisión judicial, actos que no son susceptible de control jurisdiccional, por tratarse de actos de ejecución.

Ahora bien, el Consejo de Estado, al analizar que es un acto administrativo de ejecución, ha dicho lo siguiente⁷:

“Sea lo primero advertir que son actos definitivos, susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 1437, “los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.

*Así pues, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas, **mientras que los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa⁸, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado.***

⁷ C. de E., Sección Cuarta, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, septiembre 26 de 2013, Radicación: 68001-23-33-000-2013-00296-01(20212). Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Demandado: Municipio de Bucaramanga.

⁸ C. de E. Sección Cuarta, CP: Ligia López Díaz, providencia de marzo 30 de 2006, Radicación: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias del 15 de noviembre de 1996, Exp. 7875, C.P. Consuelo Sarriá Olcos, del 9 de agosto de 1991, Exp. 5934 C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, Exp. 6314 C.P. Juan Alberto Polo.



*De acuerdo con lo anterior, únicamente las decisiones de la Administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que **“los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones”**.⁹*

*No obstante, esta Corporación ha admitido que si el supuesto **“acto de ejecución”** **excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer el medio de control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad**¹⁰, circunstancia que no ocurre en el caso concreto...”* (subrayado del texto, negritas de la Sala).

Bajo esta perspectiva, y una vez analizadas las pretensiones en especial el restablecimiento del derecho, la demandante discute la fecha del status pensional la cual considera que debe ser desde el 29 de mayo de 1988 efectiva a partir del 4 de marzo de 1999 y el juez ordinario en el proceso con rad. 2004-3675 determino que debe ser efectiva a partir del 17 de enero de 1984, pero con efectos fiscales a partir del 26 de noviembre de 2000 por prescripción.

La Sala de Decisión, no se observa que la entidad emisora de los actos administrativos se haya extralimitado, con la expedición de la **Resolución UGM008509** del 15 de septiembre de 2011 *“Por la cual se reliquida una pensión de gracia Post mortem en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B”* (folios 12-17), resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: *Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B el 3 de abril de 2008, y en consecuencia reliquidar el pago de una Pensión de Jubilación Gracia Post mortem en cuantía de \$32,078 (TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE) con ocasión del fallecimiento de ECHEVERRIA GUTIERREZ ANTONIO JOSE efectiva a partir del 17 de enero de 1984, con efectos fiscales a partir del 26 de noviembre de 2000 por prescripción trienal.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *De acuerdo al artículo anterior, dicha prestación se reliquidará a partir 15 de diciembre de 1992, día siguiente al fallecimiento del causante, conforme la siguiente distribución:*

MONTOYA RODRIGUEZ MAROTCY ya identificado(a), en calidad de Cónyuge o Compañera(o) con un porcentaje de 100.00 %. La pensión reconocida es de carácter vitalicio.”

⁹ C. de E. Sección Segunda, Subsección “A”, CP: Luis Rafael Vergara Quintero, auto del 15 de abril de 2010, Radicación número: 52001-23-31-000- 2008-00014-01(1051-08).

¹⁰ Al respecto ver: C. de Estado, Sección Cuarta, CP. Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005- 01131 01(15784); Sentencia del 15 de noviembre de 1996, Exp. 7875 CP. Consuelo Sarriá Olcos.



Seguidamente, **Resolución No. RDP-041911** de 10 de septiembre de 2013 “*Por la cual se niega una solicitud de modificatoria de la Resolución UGM 8509 del 15 de septiembre de 2011 del Sr. (a) ECHAVARRIA GUTIERREZ ANTONIO JOSE con C.C. No. 6.090.923*” (folios 22-28), resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: *Negar la Solicitud de Modificatoria de la Resolución UGM 8509 del 15 de septiembre de 2011 mediante las cuales se reconoció y reliquido la Pensión de Jubilación Gracia a favor del causante el señor ECHEVARRIA GUTIERREZ ANTONIO JOSE, ya identificado, solicitada por:*

MAROTCY MONTOYA RODRIGUEZ identificado (a) con CEDULA CIUDADANIA No. 31883545 expedida en CALI.”

Finalmente, con la **Resolución No. RDP-046803** del 8 de octubre de 2013 “*Por medio de la cual se niega una solicitud de revocatoria directa del del Sr. (a) ECHAVARRIA GUTIERREZ ANTONIO JOSE con C.C. No. 6.090.923*” (folios 30-36), la UGPP resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: *Negar la Solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución No. RDP 041911 del 10 de septiembre de 2013 mediante la cual se negó la modificatoria de la Resolución No UGM 8509 del 15 de septiembre de 2011.”*

Bajo esta perspectiva, la UGPP no declara la voluntad de la administración, ya que se limita a dar cumplimiento a una decisión judicial tal y como se dejó plasmado en la parte considerativa, no vislumbra la Sala que en dicho acto surja una situación jurídica diferente a lo ordenado en la sentencia que emitió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado dentro del trámite ordinario. De manera que, los enunciados actos no son susceptible de control judicial dadas las características del asunto, tal como lo prevé el artículo 169 numeral 3 del CPACA y la jurisprudencia mencionada.

5.6. CONCLUSIÓN.

El auto recurrido será confirmado por las razones expuestas en esta providencia, ya que el asunto no es susceptible de control judicial dadas las características del asunto, tal como lo prevé el artículo 169 núm. 3 del CPACA y la jurisprudencia mencionada y además por haberse configurado la cosa juzgada como lo determino el *a quo*.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión del Sistema Oral,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 369 de abril 28 de 2015, proferido en la audiencia inicial por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, por las razones expuestas en esta providencia.



SEGUNDO. Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

Se discutió y aprobó en sesión de Sala de la misma fecha¹¹.

Los magistrados,

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

(Firma electrónica SAMAI)

OMAR EDGAR BORJA SOTO

(Firma electrónica SAMAI)

EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

(Ausente con permiso)

¹¹ Decisión fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las medidas del Consejo Superior de la Judicatura en razón de la pandemia Covid-19.